Resolución del Pleno del Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de México y Municipios, con domicilio en Metepec, Estado de México, a veintiuno de febrero de dos mil veinticuatro.

**VISTO** el expediente formado con motivo del recurso de revisión **04734/INFOEM/IP/RR/2023**, interpuesto por **XXXXXX XXXXXXXXXX XXXXX,** en lo sucesivola parte **Recurrente,** en contra de la respuesta a su solicitud por parte de la **Secretaría de Educación,** en lo sucesivo el **Sujeto Obligado,** se procede a dictar la presente resolución con base en los siguientes:

**I. A N T E C E D E N T E S**

**1. Solicitud de acceso a la información.** Con fecha **tres de agosto de dos mil veintitrés,** la parte **Recurrente** presentó, a través del Sistema de Acceso a la Información Mexiquense, en lo subsecuente el **SAIMEX,** ante el **Sujeto Obligado**, la solicitud de acceso a la información pública, a la que se le asignó el número **00790/SE/IP/2023,** mediante la cual requirió la información siguiente:

*“Dada la situación que exponen los noticieros de tv, en los que indican que los libros de texto gratuito son comunistas y cuentan con pocas matemáticas para enseñar a los alumnos. Solicito saber: Las medidas implementadas por la secretaría de educación para tener una educación que lleve al mejoramiento de los alumnos? Las medidas implementadas en el tema de los libros de texto gratuito? Entregaran a los alumnos del Estado de México los libros de textos gratuitos? Se basaran en dichos libros para el ciclo que inicia este agosto 2023? Entregaran las guías a los docentes? Impondrán a los docentes que se utilicen las guías? La secretaría de educación del estado de Mexico apoya las ideologías comunistas?****”*** *(sic)*

**Modalidad de Entrega:** a través **de SAIMEX.**

**2. Respuesta.** Con fecha **ocho de agosto de dos mil veintitrés**, el **Sujeto Obligado** envió su respuesta a la solicitud de acceso a la información a través de SAIMEX, sustancialmente en los términos siguientes:

*“…Con fundamento en el artículo 167 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de México y Municipios, le informo que este Sujeto Obligado es incompetente para proporcionar la información, por lo que se sugiere presentar una nueva solicitud de información con el Sujeto Obligado correspondiente...” (sic)*

El **Sujeto Obligado** adjuntó el oficio número 21000007010000S/1814/UT/2023, de fecha ocho de agosto de dos mil veintitrés, mediante el cual se informa a la persona solicitante que la Secretaría de Educación Pública (SEP) es la encargada de elaborar, editar, mantener actualizados y enviar a las entidades federativas en formatos accesibles los libros de texto gratuitos y demás materiales educativos, mediante procedimientos que permitan la participación de los diversos sectores sociales involucrados en la educación, de conformidad con lo establecido por el artículo 113 de la Ley General de Educación.

Asimismo, se hace de su conocimiento que la Secretaría de Educación Pública (SEP) es un Sujeto Obligado diverso de la Secretaría de Educación del Estado de México (SEDUC), por tal motivo se le sugiere presentar su solicitud ante la Unidad de Transparencia de la Secretaría de Educación Pública (SEP), para lo cual se proporcionan los siguientes datos:



Finalmente, se precisa que la naturaleza del derecho de acceso a la información impide que se dé contestación a requerimientos que conllevan al pronunciamiento específico de interrogantes sobre variados temas, resultando el requerimiento en un pronunciamiento sobre cuestionamientos derivados de juicios.

**3. Interposición del recurso de revisión.** Inconforme con los términos de la respuesta emitida por parte del **Sujeto Obligado**, el **veintitrés de agosto de dos mil veintitrés,** la parte **Recurrente** interpuso el recurso de revisión a través de **SAIMEX,** en donde se manifestó de la siguiente manera:

**Acto impugnado:**

*“La incompetencia que determina el Sujeto Obligado” (sic)*

**Y Razones o motivos de inconformidad**:

*“El sujeto obligado determina que es incompetencia, la solicitud inicial requiere información que le compete a la Secretaria de Educación del GEM, ya que se trata de información que el Gobierno del Estado de México tiene la capacidad, competencia, función y atribución de decidir si dichos libros se utilizarán o no, así como de todo lo requerido en la solicitud inicial. Lo anterior con fundamento en el artículo 2 de la CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, ya que menciona; “que reconoce y garantiza el derecho de los pueblos y las comunidades indígenas a la libre determinación y, en consecuencia, a la autonomía”. Asi mismo considerando que la Secretaria de Educacion Publica SEP, violo los lineamientos para la elaboración de los libros, se visualizan notablemente los errores, asi como de la limitación en la materia matematicas, fechas erroneas, etc. Robusteciendo lo anterior se cita el articulo 3 de la CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, en donde menciona que para tal efecto, considerará la opinión… A fin de dar cumplimiento a lo dispuesto en la fracción II de este artículo, el Ejecutivo Federal determinará los principios rectores y objetivos de la educación inicial, así como los planes y programas de estudio de la educación básica y normal en toda la República; para tal efecto, considerará la opinión de los gobiernos de las entidades federativas y de diversos actores sociales involucrados en la educación, así como el contenido de los proyectos y programas educativos que contemplen las realidades y contextos, regionales y locales. Los planes y programas de estudio tendrán perspectiva de género y una orientación integral, por lo que se incluirá el conocimiento de las ciencias y humanidades: la enseñanza de las matemáticas, la lecto- escritura, la literacidad, la historia, la geografía, el civismo, la filosofía, la tecnología, la innovación, las lenguas indígenas de nuestro país, las lenguas extranjeras, la educación física, el deporte, las artes, en especial la música, la promoción de estilos de vida saludables, la educación sexual y reproductiva y el cuidado al medio ambiente, entre otras. … II. El criterio que orientará a esa educación se basará en los resultados del progreso científico, luchará contra la ignorancia y sus efectos, las servidumbres, los fanatismos y los prejuicios. Considerando todo lo antes mencionado la Secretaria de Educación del Gobierno del Estado de México tiede autonomia para determinar y responder lo solicitado, asi mismo para un mejoramiento educativo en el Estado de México, y especificamente para luchar contra la ignorancia como lo dice el articulo 3 fraccion II de la constitución.” (sic)*

**4. Turno.** De conformidad con el artículo 185 fracción I de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de México y Municipios vigente, el presente recurso de revisión se turnó por el sistema electrónico del Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de México y Municipios, a la Comisionada **Guadalupe Ramírez Peña,** a efecto de que analizara sobre su admisión o su desechamiento.

**5. Admisión del Recurso de revisión.** Con fecha **veintiocho de agosto de dos mil veintitrés,** este Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de México y Municipios, admitió a trámite el recurso de revisión que ahora se resuelve, dando un plazo máximo de siete días hábiles para que las partes manifestaran lo que a su derecho resultara conveniente, ofrecieran pruebas, formularan alegatos y el **Sujeto Obligado** presentara su informe justificado.

**6. Manifestaciones**. En fecha **treinta de agosto de dos mil veintitrés,** el S**ujeto Obligado** remitió, a través de SAIMEX, su informe justificado, mediante el cual ratifica en lo medular la respuesta emitida en primera instancia, asimismo, refiere que la Secretaría de Educación del Gobierno del Estado de México, de conformidad con lo establecido en la Ley de Educación del Estado de México, no cuenta con autonomía para decidir respecto de la entrega de los libros de texto, todas vez que no es facultad de la Secretaría de Educación, derivado de lo dispuesto en el artículo 27, fracción XVI de dicha Ley.

Refiere el contenido de los artículos 22, primer y último párrafo y 23, primer párrafo de la Ley General de Educación en relación a los planes y programas de estudio.

Por último, diferencia el Derecho de acceso a la información del Derecho de petición, conforme a lo establecido en los artículos 6 y 8 Constitucionales, concluyendo que los planteamientos de la persona solicitante no pueden ser atendidos a través del Derecho de acceso, al no existir materia sobre la que el Sujeto Obligado o Sujeto Obligado diverso pueda entregar información, ya que lo solicitado supone que se emita un pronunciamiento especifico que conteste las interrogantes presentadas, y solicita en el acto se determine la improcedencia y sobreseimiento del recurso de revisión.

Una vez analizados los documentos referido, se hicieron del conocimiento de la persona solicitante con la finalidad de que manifestara lo que a su derecho estimara conveniente, siendo omisa en ejercer dicha prerrogativa.

**7. Ampliación del término para resolver**. En fecha **dieciocho de octubre de dos mil veintitrés**, se amplió el término para resolver el recurso de revisión en términos del artículo 181 párrafo tercero de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de México y Municipios.

Este Organismo Garante no pasa por alto justificar, que el plazo para emitir la resolución en el presente asunto encuentra justificación en el alto número de recursos de revisión recibidos, circunstancia atípica que ha rebasado las capacidades técnicas y humanas del personal encargado de la proyección de las resoluciones a dichos medios de impugnación.

Por ello, es menester precisar que, si bien se ha excedido el plazo para resolver el presente medio de impugnación, de conformidad con la ley de la materia, el plazo para emitir la resolución se encuentra justificado en los elementos para medir la razonabilidad de asuntos conforme a los parámetros establecidos por diversos órganos jurisdiccionales federales, aplicables también en procedimientos análogos, como el que nos ocupa.

Así, en términos de lo que establecen los artículos 8.1 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, los recursos deben ser sencillos y resolverse en el menor tiempo posible, tomando en consideración la dilación total del procedimiento; esto es, en un plazo razonable.

En ese sentido, el legislador fijó los términos procesales en las leyes, de manera general, sin que pudiera prever la variada gama de casos que son resueltos por los órganos jurisdiccionales o cuasi jurisdiccionales, tanto por la complejidad de los hechos, como por el número de casos que conocen.

Por ello, excepcionalmente, si un asunto es resuelto con posterioridad a los plazos señalados por la norma debe analizarse la razonabilidad del tiempo necesario para su resolución, atentos a los siguientes criterios:

1. Complejidad del Asunto: La complejidad de la prueba, la pluralidad de sujetos procesales, el tiempo transcurrido, las características y contexto del recurso.
2. Actividad Procesal del interesado. Acciones u omisiones del interesado.
3. Conducta de la Autoridad: Las Acciones u omisiones realizadas en el procedimiento. Así como si la autoridad actuó con la debida diligencia.

d) La afectación generada en la situación jurídica de la persona involucrada en el proceso: Violación a sus derechos humanos.

De modo que, cuando se trate de un asunto excepcional, por alguna o todas las características mencionadas; o bien, cuando el ingreso de asuntos al órgano jurisdiccional o cuasi jurisdiccional respectivo supere notoriamente al que podría considerarse normal, debe concluirse que es una excluyente de responsabilidad en relación con la actuación del funcionario, como ha acontecido en el caso que nos ocupa.

Argumento que encuentra sustento en la jurisprudencia P./J. 32/92 emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación de rubro *“TÉRMINOS PROCESALES. PARA DETERMINAR SI UN FUNCIONARIO JUDICIAL ACTUÓ INDEBIDAMENTE POR NO RESPETARLOS SE DEBE ATENDER AL PRESUPUESTO QUE CONSIDERÓ EL LEGISLADOR AL FIJARLOS Y LAS CARACTERÍSTICAS DEL CASO.”*, visible en la Gaceta del Seminario Judicial de la Federación con el registro digital 205635.

Razones por las cuales cabe concluir que, la resolución al recurso de revisión se solventa hasta esta fecha, debido a que existe una excesiva carga de trabajo en desproporción a la capacidad de los recursos materiales y humanos con que cuenta este Instituto para atender la enorme demanda de usuarios que acuden para que se les garantice su Derecho de acceso a la información Pública y Protección de Datos Personales, aunado a la complejidad de los hechos a los que se refieren, así como al volumen del expediente, la extensión de los escritos y pruebas aportadas y desahogadas por las partes; lo que impide la tramitación de los recursos dentro de los términos legales previamente establecidos por la Ley, por tratarse de causas de fuerza mayor.

Al respecto, también son de considerar los criterios sostenidos por el Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, cuyos rubros y datos de identificación son los siguientes:

 *“****PLAZO RAZONABLE PARA RESOLVER. DIMENSIÓN Y EFECTOS DE ESTE CONCEPTO CUANDO SE ADUCE EXCESIVA CARGA DE TRABAJO****.”* consultable en el Seminario Judicial de la Federación y su gaceta, con el registro digital 2002351.

*“****PLAZO RAZONABLE PARA RESOLVER. CONCEPTO Y ELEMENTOS QUE LO INTEGRAN A LA LUZ DEL DERECHO INTERNACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS****.”*, visible en el Seminario Judicial de la Federación y su gaceta, con el registro digital 2002350.

Por ello, este organismo garante comprometido con la tutela de los derechos humanos confiados, señala que este exceso del plazo legal para resolver el presente asunto, resulta de carácter excepcional.

**8. Cierre de instrucción.** Una vez transcurrido el periodo otorgado a las partes para realizar sus manifestaciones y no habiendo documentos que integrar al expediente, con fecha **quince de febrero de dos mil veinticuatro,** la Comisionada Ponente determinó el cierre de instrucción en términos de la fracción VI del artículo 185 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de México y Municipios

En razón de que fue debidamente sustanciado el expediente electrónico y no existe diligencia pendiente de desahogo, se emite la Resolución que conforme a Derecho proceda, de acuerdo con los siguientes:

**II. C O N S I D E R A N D O S**

**Primero. Competencia.** El Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de México y Municipios, es competente para conocer y resolver el presente recurso de revisión interpuesto por la parte recurrente, conforme a lo dispuesto en los artículos 6, apartado A de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 5 párrafos trigésimo segundo, trigésimo tercero y trigésimo cuarto fracciones IV y V de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de México; 2, fracción II; 29, 36 fracciones I y II; 176, 178, 181, 185, fracción I, 186 y 188 de la Ley Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de México y Municipios; 9, fracciones I y XXIII y 11 del Reglamento Interior del Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de México y Municipios.

**Segundo. Oportunidad y Procedibilidad del Recurso de Revisión**. Previo al estudio del fondo del asunto, se procede a analizar los requisitos de oportunidad y procedibilidad que debe reunir el recurso de revisión interpuesto, previstos en los artículos 178 y 180 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de México y Municipios.

El recurso de revisión fue interpuesto dentro del plazo de quince días hábiles, previsto en el artículo 178 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de México y Municipios, toda vez que el **Sujeto Obligado** remitió la respuesta a la solicitud de información el día **ocho de agosto de dos mil veintitrés,** mientras que el recurso de revisión interpuesto por la parte **Recurrente**, se tuvo por presentado el día **veintitrés de agosto de dos mil veintitrés**, esto es, al décimo primer día hábil posterior en que tuvo conocimiento de la respuesta impugnada.

Al mismo tiempo, por cuanto hace a la procedibilidad del recurso de revisión, una vez realizado el análisis del formato de interposición del recurso, se concluye la acreditación plena de los elementos formales precisados por el artículo 180 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de México y Municipios, en atención a que fue presentado mediante el formato visible en el SAIMEX.

Finalmente, se advierte que resulta procedente la interposición del recurso, según lo manifestado por la parte **Recurrente** en sus motivos de inconformidad, de acuerdo al artículo 179, fracciones I y IV del ordenamiento legal citado, que a la letra dice:

*“****Artículo 179.*** *El recurso de revisión es un medio de protección que la Ley otorga a los particulares, para hacer valer su derecho de acceso a la información pública, y procederá en contra de las siguientes causas:*

***I.*** *La negativa a la información solicitada;*

*...*

***IV.*** *La declaración de incompetencia por el sujeto obligado;”*

**Tercero. Análisis de las causales de sobreseimiento.** Previo al análisis de las actuaciones que integran el expediente en el Sistema de Acceso a la Información Mexiquense, es importante primeramente enfatizar que el Derecho de Acceso a la Información Pública consiste en que la **información solicitada conste en un soporte documental** en cualquiera de sus formas, a saber: expedientes, reportes, estudios, **actas,** resoluciones, oficios, correspondencia, acuerdos, directivas, directrices, circulares, contratos, convenios, instructivos, notas, memorandos, estadísticas, o bien, cualquier otro registro que documente el ejercicio de las facultades, funciones y competencias de los Sujetos Obligados; los que, podrán estar en cualquier medio, sea escrito, impreso, sonoro, visual, electrónico, informático u holográfico, de conformidad con el artículo 3, fracción XI de la Ley de la materia, el cual dispone lo siguiente:

*“****Artículo 3.*** *Para los efectos de la presente Ley se entenderá por:*

*…*

***XI. Documento:*** *Los expedientes, reportes, estudios, actas, resoluciones,**oficios, correspondencia, acuerdos, directivas, directrices, circulares, contratos, convenios, instructivos, notas, memorandos, estadísticas o bien, cualquier otro registro que documente el ejercicio de las facultades, funciones y competencias de los sujetos obligados, sus servidores públicos e integrantes, sin importar su fuente o fecha de elaboración. Los documentos podrán estar en cualquier medio, sea escrito, impreso, sonoro, visual, electrónico, informático u holográfico****…****”*

Siendo aplicable el Criterio de interpretación en el orden administrativo número 0002-11, emitido por Acuerdo del Pleno del Instituto de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de México y Municipios; publicado en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado Libre y Soberano de México “Gaceta del Gobierno”, el diecinueve de octubre de dos mil once, cuyo rubro y texto dispone:

**“*INFORMACIÓN PÚBLICA, CONCEPTO DE, EN MATERIA DE TRANSPARENCIA. INTERPRETACIÓN SISTEMÁTICA DE LOS ARTÍCULOS 2°, FRACCIÓN V, XV, Y XVI, 3°, 4°, 11 Y 41.*** *De conformidad con los artículos antes referidos, el derecho de acceso a la información pública, se define en cuanto a su alcance y resultado material, el acceso a los archivos, registros y documentos públicos, administrados, generados o en posesión de los órganos u organismos públicos, en virtud del ejercicio de sus funciones de derecho público, sin importar su fuente, soporte o fecha de elaboración.*

*En consecuencia el acceso a la información se refiere a que se cumplan cualquiera de los siguientes tres supuestos:*

*1) Que se trate de información* ***registrada en cualquier soporte documental****, que en ejercicio de las atribuciones conferidas, sea generada por los Sujetos Obligados;*

*2) Que se trate de información* ***registrada en cualquier soporte documental****, que en ejercicio de las atribuciones conferidas, sea administrada por los Sujetos Obligados, y*

*3) Que se trate de información* ***registrada en cualquier soporte documental****, que en ejercicio de las atribuciones conferidas, se encuentre en posesión de los Sujetos Obligados.” (Sic)*

En este sentido, en términos generales, para que sea posible el ejercicio del Derecho de Acceso a la Información Pública, los requerimientos deben consistir en información que se encuentre registrada en cualquier soporte documental; ya sea, porque el Sujeto Obligado la generó o porque como parte del ejercicio de sus funciones la recibió y por consiguiente, la administra y posee.

Lo anterior encuentra sustento en el artículo 4 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de México y Municipios, que dispone que toda la información generada, obtenida, adquirida, transformada, administrada o en posesión de los sujetos obligados es pública y accesible de manera permanente a cualquier persona, privilegiando el principio de máxima publicidad, como así lo establece dicha determinación, que a continuación se trascribe para un mejor entendimiento:

*“****Artículo 4****. El derecho humano de acceso a la información pública es la prerrogativa de las personas para buscar, difundir, investigar, recabar, recibir y solicitar información pública, sin necesidad de acreditar personalidad ni interés jurídico.*

***Toda la información generada, obtenida, adquirida, transformada, administrada o en posesión de los sujetos obligados es pública y accesible de manera permanente a cualquier persona****, en los términos y condiciones que se establezcan en los tratados internacionales de los que el Estado mexicano sea parte, en la Ley General, la presente Ley y demás disposiciones de la materia, privilegiando el principio de máxima publicidad de la información. Solo podrá ser clasificada excepcionalmente Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de México y Municipios 29 como reservada temporalmente por razones de interés público, en los términos de las causas legítimas y estrictamente necesarias previstas por esta Ley.*

***Los sujetos obligados deben poner en práctica, políticas y programas de acceso a la información que se apeguen a criterios de publicidad, veracidad, oportunidad, precisión y suficiencia en beneficio de los solicitantes****.”(Sic)*

Esto es, que los Sujetos Obligados tiene la obligación o deber de atender las solicitudes de acceso a la información pública que se les hagan de su conocimiento y proporcionar la información pública que obre en su poder conforme el estado que se encuentra y no hacer un procesamiento de la misma, ni presentarla conforme al interés del solicitante; como así lo establece el artículo 12 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de México y Municipios, que a la letra dice:

***“Artículo 12.-*** *Quienes generen, recopilen, administren, manejen, procesen, archiven o conserven información pública serán responsables de la misma en los términos de las disposiciones jurídicas aplicables.*

***Los sujetos obligados sólo proporcionarán la información pública que se les requiera y que obre en sus archivos y en el estado en que ésta se encuentre****.* ***La obligación de proporcionar información no comprende el procesamiento de la misma, ni el presentarla conforme al interés del solicitante; no estarán obligados a generarla, resumirla, efectuar cálculos o practicar investigaciones.” (Sic)***

Es decir, que todo Sujeto Obligado que genere, recopile, administre, procese, archive, posea o conserven, son responsables de la misma teniendo a su vez la obligación de proporcionar la información que se les requiera sin necesidad de resumirla, efectuar procedimientos para obtenerla, calcular y practicar investigaciones; en otras palabras, que los Sujetos Obligados solo se concretaran a proporcionar la información solicitada que tengan en su poder en el estado que se encuentran, sin necesidad de concretarse al interés o términos específicos del solicitante.

Sirve de apoyo a lo anterior, el criterio 03/17, emitido por el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, que, por rubro y texto, dispone lo siguiente:

*“****No existe obligación de elaborar documentos ad hoc para atender las solicitudes de acceso a la información.*** *Los artículos 129 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública y 130, párrafo cuarto, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, señalan que los sujetos obligados deberán otorgar acceso a los documentos que se encuentren en sus archivos o que estén obligados a documentar, de acuerdo con sus facultades, competencias o funciones, conforme a las características físicas de la información o del lugar donde se encuentre. Por lo anterior, los sujetos obligados deben garantizar el derecho de acceso a la información del particular, proporcionando la información con la que cuentan en el formato en que la misma obre en sus archivos; sin necesidad de elaborar documentos ad hoc para atender las solicitudes de información.” (Sic)*

En este orden de ideas, del análisis de la solicitud de información, motivo del recurso de revisión que ahora se resuelve, se advierte que la persona solicitante requirió al **Sujeto Obligado** le proporcione información que consiste en lo siguiente:

Dada la situación que exponen los noticieros de TV, en los que indican que los libros de texto gratuito son comunistas y cuentan con pocas matemáticas para enseñar a los alumnos:

1. Las medidas implementadas por la Secretaría de Educación para tener una educación que lleve al mejoramiento de los alumnos

2. Las medidas implementadas en el tema de los libros de texto gratuito.

3. ¿Entregaran a los alumnos del Estado de México los libros de textos gratuitos?

4. ¿Se basarán en dichos libros para el ciclo que inicia este agosto 2023?

5. ¿Entregarán las guías a los docentes?

6. ¿Impondrán a los docentes que se utilicen las guías?

7. ¿La Secretaría de Educación del Estado de México apoya las ideologías comunistas?

En respuesta, el **Sujeto Obligado,** hizo del conocimiento de la persona solicitante que no cotaba con competencia para proporcionar información, sugiriendo presentar la solicitud ante la Secretaría de Educación Pública, SEP. Asimismo, precisa que la naturaleza del derecho de acceso a la información impide que se dé contestación a requerimientos que conllevan al pronunciamiento especifico de interrogantes sobre variados temas, resultando el requerimiento en un pronunciamiento sobre cuestionamientos derivados de juicios.

Una vez notificada la respuesta, la persona solicitante interpuso el recurso de revisión que nos ocupa, en el cual señaló como motivo de inconformidad: *“El sujeto obligado determina que es incompetencia, la solicitud inicial requiere información que le compete a la Secretaria de Educación del GEM, ya que se trata de información que el Gobierno del Estado de México tiene la capacidad, competencia, función y atribución de decidir si dichos libros se utilizarán o no, así como de todo lo requerido en la solicitud inicial. Lo anterior con fundamento en el artículo 2 de la CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, ya que menciona; “que reconoce y garantiza el derecho de los pueblos y las comunidades indígenas a la libre determinación y, en consecuencia, a la autonomía”. Asi mismo considerando que la Secretaria de Educacion Publica SEP, violo los lineamientos para la elaboración de los libros, se visualizan notablemente los errores, asi como de la limitación en la materia matematicas, fechas erroneas, etc. Robusteciendo lo anterior se cita el articulo 3 de la CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, en donde menciona que para tal efecto, considerará la opinión… A fin de dar cumplimiento a lo dispuesto en la fracción II de este artículo, el Ejecutivo Federal determinará los principios rectores y objetivos de la educación inicial, así como los planes y programas de estudio de la educación básica y normal en toda la República; para tal efecto, considerará la opinión de los gobiernos de las entidades federativas y de diversos actores sociales involucrados en la educación, así como el contenido de los proyectos y programas educativos que contemplen las realidades y contextos, regionales y locales. Los planes y programas de estudio tendrán perspectiva de género y una orientación integral, por lo que se incluirá el conocimiento de las ciencias y humanidades: la enseñanza de las matemáticas, la lecto- escritura, la literacidad, la historia, la geografía, el civismo, la filosofía, la tecnología, la innovación, las lenguas indígenas de nuestro país, las lenguas extranjeras, la educación física, el deporte, las artes, en especial la música, la promoción de estilos de vida saludables, la educación sexual y reproductiva y el cuidado al medio ambiente, entre otras. … II. El criterio que orientará a esa educación se basará en los resultados del progreso científico, luchará contra la ignorancia y sus efectos, las servidumbres, los fanatismos y los prejuicios. Considerando todo lo antes mencionado la Secretaria de Educación del Gobierno del Estado de México tiede autonomia para determinar y responder lo solicitado, asi mismo para un mejoramiento educativo en el Estado de México, y especificamente para luchar contra la ignorancia como lo dice el articulo 3 fraccion II de la constitución.” (sic)*

En la etapa de manifestaciones el **Sujeto Obligado,** ratificó en lo sustancial la respuesta emitida en primera instancia, y la parte **Recurrente** fue omisa en ejercer dicha prerrogativa.

Expuestas las posturas de las partes, es preciso mencionar, en primer lugar, que del análisis de los requerimientos de información marcados con los numerales 3, 4, 5, 6, y 7, se advirtió que la persona solicitante pretende que el **Sujeto Obligado** responda de manera concisa, es decir, que se pronuncie en sentido afirmativo o negativo sobre diversas cuestiones, esto es, que diga:

* Si se entregarán a los alumnos del Estado de México los libros de textos gratuitos, o no.
* Si se basarán en dichos libros para el ciclo que inicia en agosto 2023, o no.
* Si entregarán las guías a los docentes, o no.
* Si impondrán a los docentes que se utilicen las guías, o no.
* Si la Secretaría de Educación del Estado de México apoya las ideologías comunistas, o no.

Situación que conlleva a precisar que con tales planteamientos la persona solicitante no pretendió ejercer su derecho de acceso a la información pública; sino que por este medio presentó interrogantes cuya finalidad es obligar a la autoridad a que actúe en el sentido de contestar lo solicitado, que no es factible atenderse vía acceso a la información pública, toda vez, que la atención a dichos cuestionamientos no se puede colmar con documentos que obren en los archivos del **Sujeto Obligado**.

Por lo anterior, del análisis realizado al expediente electrónico, se advierte que dichos requerimientos no constituyen un derecho de acceso a la información y por lo tanto no son atendibles mediante una solicitud de acceso a la información pública, al tratan de manifestaciones vertidas por la persona solicitante, interrogantes y declaraciones, situación que conlleva a afirmar que se está en presencia del ejercicio del derecho a la libre expresión y en todo caso a un derecho de petición.

A efecto de sustentar lo anterior, es preciso mencionar que David Cienfuegos Salgado, concibe al derecho de petición como *“****el derecho de toda persona a ser escuchado por quienes ejercen el poder públic****o. [[1]](#footnote-1)” (Sic)*

De la misma manera, Miguel Carbonell en su libro “Los derechos fundamentales” refiere que el derecho de petición se ha entendido de dos distintitas maneras, a saber: como un derecho fundamental de participación política ya que permite a los particulares trasladar a las autoridades sus **inquietudes, quejas**, sugerencias y requerimientos en cualquier materia o asunto; y como una **forma específica de la libertad de expresión**, en tanto que permite expresarse frente a las autoridades. De igual manera que el derecho de petición se traduce en la obligación de todos los funcionarios y autoridades de permitir a los ciudadanos de dirigirse a ellos en demanda de lo que deseen expresar o solicitar y responder de dicha demanda por escrito, de forma congruente y en un plazo breve.[[2]](#footnote-2)

Por otro lado, el autor anteriormente citado, indica que el **derecho de acceso a la información pública** es el derecho de conocer la **información de carácter público que se genera o está en posesión de los órganos del poder público** o de los sujetos que utilizan o se benefician con recursos provenientes del Estado, es el derecho que tienen los ciudadanos para acceder a documentos y datos que obren en el poder del gobierno.

Por su parte Ernesto Villanueva define al derecho de acceso a la información pública como la prerrogativa de la persona para acceder a datos, registros y todo tipo de informaciones en poder de las entidades públicas y empresas privadas que ejercen gasto público o cumplen funciones de autoridad, con las excepciones taxativas que establezca la ley en una sociedad democrática.[[3]](#footnote-3)

De lo anterior se puede concluir que la distinción entre el **derecho de petición** y el derecho de acceso a la información descansa, principalmente, en que **la pretensión del peticionario consiste generalmente en obligar a la autoridad responsable a que actúe** **en el sentido de contestar lo solicitado**, mientras que **en el derecho de acceso a la información pública, la pretensión radica en que se permita el acceso a datos y todo tipo de documentación que tenga el carácter de información pública, que sea generada, administrada o se encuentre en posesión de los** considerados **Sujetos Obligados** por la Ley de la Materia.

Con base a lo anterior, se insiste que de la lectura de los puntos 3, 4, 5, 6 y 7, de la solicitud, no se advierte que la persona solicitante pretenda el acceso a documentos previamente generados**, s**ino más bien, **requiere un pronunciamiento específico por parte del Sujeto Obligado que dé respuesta en sentido afirmativo o negativo a sus inquietudes,** sin embargo, la entrega de una razón o la respuesta o atención a pronunciamientos que no encuentren en soporte documental alguno, no es algo que la Ley de la Materia establezca como atribución, derecho o facultad; pues ello implicaría emitir un juicio de valor referente a cuestionamientos realizados, los cuales como ha quedado explicado, al constituir **interrogantes, inquietudes, quejas y manifestaciones** resultan estar encaminadas a ser satisfechas en ejercicio del derecho de petición.

Sin dejar de mencionar que, tanto en respuesta como en la etapa de manifestaciones, el **Sujeto Obligado** señaló tal situación, pues señaló que la naturaleza del derecho de acceso a la información impide que se dé contestación a requerimientos que conllevan al pronunciamiento específico de interrogantes sobre temas variados, por consiguiente, manifestó que los planteamientos de la persona solicitante no pueden ser atendidos a través del Derecho de acceso, al no existir materia sobre la que el Sujeto Obligado o Sujeto Obligado diverso pueda entregar información, en virtud de que lo solicitado supone que se emita un pronunciamiento especifico que conteste las interrogantes presentadas.

Aunado a lo anterior, es de resaltar que este Instituto de Transparencia como Organismo Garante de difusión, protección y respeto al derecho de acceso a la información pública y a la protección de datos personales, conforme a su naturaleza jurídica y a sus atribuciones previstas en los artículos 29, 36 y 179 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de México y Municipios, es competente para resolver los recursos de revisión, cuando se niegue la información solicitada, se clasifique la información solicitada, se declare la inexistencia de lo solicitado, el Sujeto Obligado se declare incompetente para atender la solicitud de información, se entregue la información incompleta, se entregue información que no corresponda a lo solicitado, no se dé respuesta a la solicitud, se notifique o se ponga a disposición la información en un formato o modalidad distinto al solicitado, incomprensible o no accesible, respecto de los costos o tiempos de entrega de la información, cuando no se dé trámite a la solicitud, no se permita la consulta directa de la solicitud, se fundamente o motive deficientemente, y/o cuando se oriente a un trámite en específico; todo en ejercicio del derecho de acceso a la información pública, no así cuando se trate de un derecho de petición ejercido por un gobernado; en consecuencia, este Instinto no tiene atribuciones para pronunciarse respecto a las manifestaciones expuestas por la parte **Recurrente,** esencialmente en virtud de que la solicitud de la persona solicitante es tendente a que el **Sujeto Obligado** aclare o actué sobre una inquietud, en consecuencia, no es procedente ordenar la entrega de documento alguno, toda vez que no se pretendió el acceso a documentos previamente generados, sino un pronunciamiento del **Sujeto Obligado**.

Por otro lado, respeto de los puntos 1 y 2 de la solicitud, se resalta la innegable necesidad de interpretar el texto de dichos requerimientos, porque no se podría entender el derecho de acceso a la información sin la existencia de solicitudes de información a la luz de su interpretación ya que ésta es la fuente de la materia objeto de la transparencia específica en cada recurso de revisión; es decir, no podemos establecer una materia o un tema como objeto de derecho de acceso a la información, si de la solicitud no se entiende o no se precisan temas o materias objetivas; por ello es de notoria importancia el trabajo de interpretación que se le dé a una solicitud de información, ya que el **Sujeto Obligado** puede considerar una circunstancia en particular diversa a la que la persona solicitante objetivamente requiere.

En esta tesitura, dado que el planteamiento del problema es de toral importancia, a efecto de determinar la intención o voluntad de la persona solicitante a la luz de la interpretación de la solicitud de información, y que puede generar de forma objetiva y material el **Sujeto Obligado** que se relacione con esa intención; respecto del presente asunto se realiza a continuación.

Atentos a la redacción de los puntos en análisis, se puede apreciar que la persona solicitante requiere objetivamente, lo siguiente:

1. Las medidas implementadas por la Secretaría de Educación **para tener una educación que lleve al mejoramiento de los alumnos.**

2. Las medidas implementadas **en el tema de los libros de texto gratuito**.

Sin que la parte solicitante precisara de manera clara o concreta, la información o documento al que pretende acceder, y, si bien es cierto, que de conformidad con el Criterio de interpretación con clave de control SO/016/2017, emitido por el Pleno Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, INAI, que es del tenor literal siguiente:

 “***Expresión documental.*** *Cuando los particulares presenten solicitudes de acceso a la información sin identificar de forma precisa la documentación que pudiera contener la información de su interés, o bien, la solicitud constituya una consulta, pero la respuesta pudiera obrar en algún documento en poder de los sujetos obligados, éstos deben dar a dichas solicitudes una interpretación que les otorgue una expresión documental.”*

En aquellos casos en los que las personas solicitantes no identifiquen de forma precisa la documentación que pudiera contener la información que es de su interés, o bien, que las solicitudes constituyan una consulta, los Sujetos Obligadoscuentan con el deber de dar a las solicitudes una interpretación que les dé una expresión documental, ya que para que el derecho de acceso a la información pública de los solicitantes se satisfaga completamente, es necesario que se les brinde el acceso a datos, registros y todo tipo de información pública que conste en documentos, ya sea generados o que se encuentre en posesión de las autoridades.

En el caso que nos ocupa, los requerimientos de información en análisis son genéricos, es decir, la persona solicitante no especificó o describió la información o documento al cual pretende tener acceso de acuerdo con las atribuciones del **Sujeto Obligado**, en términos de lo señalado por el artículo 155, fracción III de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de México y Municipios, que es del tenor literal siguiente:

 *“****Artículo 155.*** *Para presentar una solicitud por escrito, no se podrán exigir mayores requisitos que los siguientes:*

***I.*** *Nombre del solicitante, o en su caso, los datos generales de su representante;*

***II****. Domicilio o en su caso correo electrónico para recibir notificaciones;*

***III. La descripción de la información solicitada****;*

***IV. Cualquier otro dato que facilite la búsqueda y eventual localización de la información; y***

***V.*** *La modalidad en la que prefiere se otorgue el acceso a la información, la cual podrá ser verbal, siempre y cuando sea para fines de orientación, mediante consulta directa, mediante la expedición de copias simples o certificadas o la reproducción en cualquier otro medio, incluidos los electrónicos.*

*Queda prohibido para los sujetos obligados recabar datos que den lugar a indagatorias sobre las motivaciones de la solicitud de información y su uso posterior.*

*Las solicitudes anónimas, con nombre incompleto o seudónimo serán procedentes para su trámite por parte del sujeto obligado ante quien se presente.*

*No podrá requerirse información adicional con motivo del nombre proporcionado por el solicitante.*

*La información de las fracciones I y IV será proporcionada por el solicitante de manera opcional y, en ningún caso, podrá ser un requisito indispensable para la procedencia de la solicitud.*

En ese sentido, al no proporcionar la persona solicitante la descripción de la información solicitada para su búsqueda y localización, no debe perderse de vista que los Sujetos Obligados tienen la de facultad requerir a los solicitantes una aclaración, cuando la solicitud no sea clara, en términos de lo señalado por el artículo 159 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de México y Municipios, a saber:

*“****Artículo 159.*** *Cuando los detalles proporcionados para localizar los documentos resulten insuficientes, incompletos o sean erróneos, la Unidad de Transparencia podrá requerir al solicitante, por una sola vez y dentro de un plazo que no podrá exceder de cinco días hábiles contados a partir de la presentación de la solicitud, para que, en un término de hasta diez días hábiles, indique otros elementos que complementen, corrijan o amplíen los datos proporcionados o bien, precise uno o varios requerimientos de información.*

*En este requerimiento interrumpirá el plazo de respuesta establecido en el artículo 163 de la presente Ley, por lo que comenzará a computarse nuevamente al día siguiente del desahogo por parte del particular.*

*En este caso, el sujeto obligado atenderá la solicitud en los términos en que fue desahogado el requerimiento de información adicional. La solicitud se tendrá por no presentada cuando los solicitantes no atiendan el requerimiento de información adicional, salvo que en la solicitud inicial se aprecien elementos que permitan identificar la información requerida, quedando a salvo los derechos del particular para volver a presentar su solicitud. En el caso de requerimientos parciales no desahogados, se tendrá por presentada la solicitud por lo que respecta a los contenidos de información que no formaron parte del requerimiento.“*

Circunstancia que no sucedió en el presente caso en particular, ya que el **Sujeto Obligado**, se concretó a señalar la falta de atribuciones para elaborar, editar, mantener actualizados y enviar a las entidades federativas en formatos accesibles los libros de texto gratuitos, así como la imposibilidad para atender las interrogantes planteadas por la persona solicitante a través del ejercicio del Derecho de acceso a la información, de ahí que, que se le invite para que subsecuentes solicitudes de información haga los requerimientos que estime pertinentes con la finalidad de garantizar el derecho de acceso a la información de los particulares.

Una vez sentado lo anterior, como ha sido mencionado, de la lectura de los requerimientos de información marcados con los numerales 1 y 2, de solicitud, no se advierte ningún elemento que pueda llevar a una búsqueda de la información requerida, al no proveer datos preponderantemente específicos y detallados, los cuales se encuentran en clara desvinculación con su contexto subjetivo.

En esa tesitura, si bien la inconformidad se encuentran fundada para la procedencia de la interposición del recurso de revisión, al encuadrar en la hipótesis normativa de las fracciones I y IV del artículo 179 de la Ley de Transparencia Local, toda vez que se impugna la negativa de la información solicitada, así como la declaración de incompetencia; también lo es que el mismo resulta infundado en el caso particular, pues como quedó acreditado en párrafos anteriores, se advierte que la parte **Recurrente**, en la solicitud que dio origen al recurso de revisión que se resuelve, no proporcionó algún dato que pueda llevar a una búsqueda de la información a la cual pretende tener acceso.

Por consiguiente y en atención a la solicitud de acceso a la información pública, no se advierte el documento, o la expresión documental al cual pretende acceder la parte **Recurrente**, de acuerdo con las atribuciones conferidas a la Secretaría de Educación Ciencia, Tecnología e Innovación del Estado de México, en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de México, la Ley General de Educación, la Ley de Educación del Estado de México, la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de México, así como el Reglamento Interior de la Secretaría de Educación, Ciencia, Tecnología e Innovación, y demás dispositivos normativos aplicables al caso concreto.

En virtud de los argumentos expuestos con anterioridad así como del análisis realizado a las constancias que obran en el expediente electrónico, al no haber materia que permita hacer el estudio correspondiente a las medidas implementadas por la Secretaría de Educación para tener una educación que lleve al mejoramiento de los alumnos, así como a las medidas implementadas en el tema de los libros de texto gratuito, se determina *sobreseer* el presente recurso de revisión por actualizarse la causal de sobreseimiento prevista en la fracción V del artículo 192 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de México y Municipios, el que se transcribe a continuación, para un mejor entendimiento:

*“****Artículo 192.*** *El recurso será sobreseído, en todo o en parte, cuando una vez admitido, se actualicen alguno de los siguientes supuestos:*

*…*

***V.*** *Cuando por cualquier motivo quede sin materia el recurso. “*

Siendo el *sobreseimiento* un acto que da por terminado el procedimiento administrativo de impugnación sin resolver el fondo de la cuestión planteada, por presentarse causas que impiden a la autoridad referirse a lo sustancial de lo planteado por el recurrente, los efectos del sobreseimiento consisten en dar por concluido el recurso administrativo sin entrar al estudio de fondo del asunto de que se trate; lo anterior con apoyo en el criterio del Poder Judicial de la Federación con rubro:

*“****SOBRESEIMIENTO, NO PERMITE ENTRAR AL ESTUDIO DE LAS CUESTIONES DE FONDO***

*Localización: 213609. II.2o.183 K. Tribunales Colegiados de Circuito. Octava Época. Semanario Judicial de la Federación. Tomo XIII, Febrero de 1994, Pág. 420*

*Cuerpo de tesis: No causa agravio la sentencia que no se ocupa de los razonamientos tendientes a demostrar la inconstitucionalidad de los actos reclamados de las autoridades responsables, que constituyen el problema de fondo, si se decreta el sobreseimiento del juicio.” (Sic)*

Cabe destacar que la decisión de este Organismo Colegiado de sobreseer el recurso de revisión no implica una limitación o negación a la justicia, según lo ha establecido el Poder Judicial Federal, en el criterio que es aplicable por analogía, con rubro:

***“DESECHAMIENTO O SOBRESEIMIENTO EN EL JUICIO DE AMPARO. NO IMPLICA DENEGACIÓN DE JUSTICIA NI GENERA INSEGURIDAD JURÍDICA”***

*Cuerpo de la tesis: Cuando se desecha una demanda de amparo o se sobresee en el juicio, ello no implica denegar justicia ni genera inseguridad jurídica, ya que la obligación de los tribunales no es tramitar y resolver en el fondo todos los asuntos sometidos a su consideración en forma favorable a los intereses del solicitante, sino que se circunscribe a la posibilidad que tiene cualquier individuo de acudir ante los órganos jurisdiccionales, con su promoción (demanda), a la cual debe darse el trámite acorde a las formalidades rectoras del procedimiento respectivo, dentro de las cuales el legislador previó las causales de improcedencia y sobreseimiento. Así, cuando el juzgador o tribunal de amparo se funda en una de ellas para desechar o sobreseer en un juicio, imparte justicia, puesto que el acceso a ella no se ve menoscabado, sino que es efectivo, ni se deja en estado de indefensión al promovente, no obstante sea desfavorable, al no poder negar que se da respuesta a la petición de amparo, con independencia de que no comparta el sentido de la resolución, dado que de esa forma quien imparte justicia se pronuncia sobre la acción, diciendo así el derecho y permitiendo que impere el orden jurídico.” (Sic)*

No obstante, se dejan a salvo los derechos de persona solicitante a efecto de que, de considerarlo conveniente a sus intereses, interponga una nueva solicitud de acceso ante el **Sujeto Obligado**, a fin de obtener la información de su interés, en la que detalle de manera precisa los elementos que permitan identificar la información requerida.

Bajo ese tenor con fundamento en la segunda hipótesis de la fracción I del artículo 186, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de México y Municipios, se **Sobresee** el recurso de revisión **04734/INFOEM/IP/RR/2022**, que ha sido materia del presente fallo.

Así, con fundamento en lo prescrito en los artículos 5 párrafos trigésimo segundo, trigésimo tercero y trigésimo cuarto de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de México; 2, fracción II; 29, 36 fracciones I y II; 176, 178, 181, 185 y 186 fracción II de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de México y Municipios, este Pleno:

**III. R E S U E L V E**

**Primero.** Se **Sobresee** el Recurso de Revisión **04734/INFOEM/IP/RR/2023,** porque al quedarse sin materia**,** se actualizó la causal prevista en el artículo 192, fracción V, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de México y Municipios, en términos del considerando **Tercero** de la presente Resolución.

**Segundo. Notifíquese,** vía **SAIMEX,** al Responsable de la Unidad de Transparencia del **Sujeto Obligado** la presente resolución, para su conocimiento.

**Tercero. Notifíquese,** vía **SAIMEX**, ala parte **Recurrente** la presente resolución, así como, que de conformidad con lo establecido en el artículo 196 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de México y Municipios, podrá impugnarla vía el Juicio de Amparo en los términos de las leyes aplicables.

ASÍ LO RESUELVE, POR UNANIMIDAD DE VOTOS, EL PLENO DEL INSTITUTO DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES DEL ESTADO DE MÉXICO Y MUNICIPIOS, CONFORMADO POR LOS COMISIONADOS JOSÉ MARTÍNEZ VILCHIS, MARÍA DEL ROSARIO MEJÍA AYALA, SHARON CRISTINA MORALES MARTÍNEZ, LUIS GUSTAVO PARRA NORIEGA Y GUADALUPE RAMÍREZ PEÑA; EN LA SEXTA SESIÓN ORDINARIA, CELEBRADA EL VEINTIUNO DE FEBRERO DE DOS MIL VEINTICUATRO, ANTE EL SECRETARIO TÉCNICO DEL PLENO ALEXIS TAPIA RAMÍREZ.

1. CIENFUEGOS SALGADO David. El Derecho de Petición en México. Ed. Instituto de Investigaciones Jurídica UNAM. México 2004. p. 31 [↑](#footnote-ref-1)
2. Carbonell, M. (2004). Los Derechos Fundamentales (Primera Edición ed.), México: Instituto de investigaciones Jurídicas. [↑](#footnote-ref-2)
3. VILLANUEVA VILLANUEVA Ernesto, Derecho de la Información, Ed, Porrúa S.A., México. 2006, pág.270. [↑](#footnote-ref-3)